

ECONOMÍA Y TRABAJO



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. / CHEMA MOYA (EFE)

Más ayuda para las empresas con futuro

Con la segunda ola posada desde hace semanas sobre la economía española —un factor “preocupante, que topa la recuperación”— y la mortandad empresarial disparada, los economistas del Fondo Monetario invitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a afrontar la “vulnerabilidad” del sector privado y recomiendan “priorizar las ayudas de capital” —los rescates, en castellano moderno— “en las empresas viables” y, en todo caso, con “estrategias de salida bien diseñadas”. Es decir, que cuando pase lo peor de la crisis, el Estado pueda dejar su accionariado sin grandes dificultades. “Como el coste fiscal de ayudar a todas las empresas afectadas sería prohibitivo, el Gobierno debe intervenir selectivamente para rescatar o ayudar a las empresas solventes y estratégicas”, remachan.

El FMI advierte contra la subida de las pensiones y las nóminas públicas

El organismo avisa del “alto déficit” y pide aplazar el alza de IVA e impuestos verdes

IGNACIO FARIZA, Madrid

Al FMI no le gustan nada dos medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos del Gobierno español. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva cargó ayer contra la su-

bida del 0,9% de pensiones y salarios de los funcionarios —dado el “elevado déficit estructural”— y contra el aumento de los impuestos verdes o del IVA a las bebidas azucaradas —que “podrían tener un efecto despro-

porcionado sobre la población de bajos ingresos”—. La alerta por la desigualdad es una constante en las 94 páginas de informe sobre España: quienes peor estaban serán los más golpeados por la crisis.

Las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) a dos medidas incluidas por el Ejecutivo en los Presupuestos que se están tramitando en el Congreso deben leerse en claves completamente distintas. Sobre el incremento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, la enmienda es casi a la totalidad. “Los compromisos de aumentar de forma permanente las actuales ratios de gasto, por ejemplo a través del gasto sala-

rio o las pensiones, deberían ser evitados dado el alto déficit estructural y la presión sobre el gasto de largo plazo por el envejecimiento de la población”, subrayan los técnicos del Fondo.

En el alza del IVA a las bebidas azucaradas y a los impuestos verdes, la inyectiva va más por el momento elegido —durante la mayor recesión en medio siglo, como destaca el Fondo— y por no llevar aparejado un plan de com-

pensación para los sectores más afectados —los más pobres, enfatizan— que por la medida en sí: cualquier incremento fiscal que “pueda tener un efecto desproporcionado sobre la población de bajos ingresos debe esperar a que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto para proteger a los más vulnerables”, carga. El Fondo pide aplazar los impuestos medioambientales, entre

los que se incluye la subida al diésel que quiere aprobar el Gobierno, pero un portavoz del Fondo apostilló que su referencia no era en concreto sobre el diésel sino más genérica sobre los impuestos verdes en general.

El FMI ve con buenos ojos un incremento del músculo fiscal para dedicar más recursos a combatir la pobreza y la desigualdad. “En España, la ratio de impuestos sobre PIB es relativamente baja.

Eso indica que hay margen de mejora, en especial fortaleciendo la recaudación del IVA, aumentando los impuestos especiales y los gravámenes ambientales y reduciendo las ineficiencias del sistema tributario”, argumenta. Pero, explica, antes hay que esperar a que la recuperación sea un hecho. Y cualquier incremento, remarcan, deberá ir acompañado de medidas para proteger a esos colectivos de menores ingresos.

Con la vacuna ya en el horizonte, España, Europa y el mundo atisban la luz al final del eterno túnel de la pandemia. Pero los meses que restan hasta la llegada de las primeras dosis se harán eternos. La recuperación se ha frenado —cuando no interrumpido— con la segunda ola del coronavirus, después de que el súbito parón de la actividad en primavera reabriese heridas sociales nunca cerradas. En ese marco hay que encuadrar las constantes referencias a la desigualdad del Fondo, un organismo que lleva tiempo haciendo gala de su giro social y tratando

El Fondo reclama un parque de vivienda social más amplio

La crisis golpea más a los inquilinos, señala en su informe

JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid

“La crisis del coronavirus podría empeorar los problemas de asequibilidad de los alquileres, especialmente para los grupos vulnerables”. Es el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre España, que dedica un capítulo a analizar la cuestión. El texto, publicado ayer y firmado por el economista Jorge Salas, realiza una serie de recomendaciones para aliviar la situación, entre las que

se encuentra el incremento de viviendas destinadas a alquiler social. Con solo un 2,5% del total de casas que se arriendan en manos de las Administraciones, según las últimas estimaciones del Gobierno, España cuenta con uno de los parques públicos más exigüos de Europa.

Las dificultades no son nuevas. El informe destaca que la Gran Recesión agravó los problemas de accesibilidad a la vivienda y España es uno de los países eu-

ropeos donde más arrendatarios destinan más del 40% de ingresos a gastos de la casa. Esa circunstancia es “desproporcionadamente alta entre hogares de bajos ingresos, incluyendo los jóvenes”.

El organismo destaca las asimetrías del mercado español. Mientras que es uno de los socios europeos con mayor porcentaje de personas propietarias de la casa donde viven, “la demanda de casas de alquiler ha aumentado en los últimos años, especialmen-

te entre hogares jóvenes de algunas zonas urbanas”. A la vez, “la oferta no ha seguido el mismo ritmo” y eso hace crecer las “preocupaciones” por la asequibilidad de las casas y por las consecuencias sobre la “desigualdad intergeneracional” e “inmovilidad laboral”.

En ese preocupante contexto, es previsible que la epidemia agrave la situación “comprimiendo los ingresos más de lo que potencialmente bajarán las rentas”. Es decir, que aunque se abaraten los alquileres, los hogares tendrán menos dinero por una crisis que “podría afectar desproporcionadamente a los grupos vulnerables”. El FMI pone el foco sobre tres colectivos —jóvenes, hogares pobres y migrantes— que “frecuentemente viven de alquiler”.

El informe enumera algunas de las últimas acciones políticas

en materia de alquileres, como el decreto de marzo de 2019 que subió el plazo mínimo de los arrendamientos a cinco años, la publicación de una estadística oficial de precios o los planes para aumentar los recursos públicos dedicados a arrendamiento social.

Precisamente entre las “prioridades” que cita el texto, se encuentra la de “aumentar el parque de alquiler social y enfocarlo a personas de bajos ingresos”. Junto a esta, aparecen también otras encaminadas a “asegurar un acceso rápido a las medidas de apoyo al alquiler para los más necesitados”, como mejorar la eficiencia de las ayudas a inquilinos que ofrecen las autonomías.

El otro gran objetivo que se debe perseguir, a juicio del FMI, es “acabar con las limitaciones de la oferta” de casas en alquiler, para

de dejar atrás los años del consenso de Washington y, más recientemente, de la troika.

España, subraya el Fondo, llegó a la pandemia con “una de las tasas más altas de empleo temporal de Europa”. Y los trabajadores con este tipo de contratos, muchos de ellos en el turismo, “están soportando una carga desproporcionadamente alta de la crisis”: la correlación histórica entre porcentaje de empleo temporal y desigualdad habla a las claras. A eso hay que añadir, dice, que los empleados con bajos niveles de educación tienen menos opciones de teletrabajar que en otras naciones europeas.

A favor del ingreso mínimo

Para revertir la situación, el Fondo aplaude la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —“aborda la brecha en la cobertura de los grupos desfavorecidos y rebaja las barreras administrativas para acceder a algunos programas de asistencia social”— y la utilización de los ERITE, que pide ampliar más allá de enero. Este instrumento, disponible desde los ochenta pero apenas utilizado hasta hoy, remarca, ha sido “decisivo para limitar el impacto sobre el empleo, mitigando los efectos adversos de la pandemia aunque a un considerable coste fiscal”.

Sin embargo, el FMI reclama poner las luces largas y pensar, también, en el día siguiente. En este sentido, el organismo con sede en Washington apela a mejorar la formación de los trabajadores que han perdido su empleo y el subsidio para aquellos trabajadores a los que se le acaba la protección de este paraguas temporal y acaben engrosando las listas del paro.

Los fondos europeos, acaso la única buena noticia que dejará la crisis, empezarán a llegar en 2021 y son, a juicio del Fondo, una “oportunidad excepcional” no solo para reconducir el camino de una economía que necesita dar el salto de la digitalización y las renovables, sino también para “amortiguar la crisis social y como catalizador de reformas”. También para poner en marcha un programa que complemente las rentas salariales de los hogares de bajos recursos, mitigando así una de las mayores carencias del IMV. Cuando bajen las aguas, la precariedad y la desigualdad seguirán en la orilla.

lo que pide “esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno”. Entre las medidas concretas que sugiere, figuran la simplificación de la normativa urbanística o agilizar las recalificaciones. También “asegurar buenas infraestructuras públicas que conecten las ciudades de crecimiento rápido con localidades más accesibles”.

El organismo cree que, a los problemas económicos, en España se añaden “obstáculos regulatorios” que afectarían al número de casas que se ponen en alquiler. El análisis asegura que “deberían evitarse” tanto una protección excesiva de los derechos del inquilino como la inseguridad jurídica, dos factores que desincentivan la oferta. Y aunque admite que la normativa española “no está entre las más rígidas de Europa”, sí “parece ser más ineficiente”.

Georgieva receta mochila austriaca y contrato único

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
El FMI enunció ayer uno de los problemas del mercado laboral español. “La gran brecha en los costes de despido entre los trabajos fijos y temporales es el principal factor que contribuye a la dualidad laboral”, diagnosticó. También sus solu-

El organismo que encabeza Kristalina Georgieva reclama a España cambios en el mercado laboral, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y vigilar los retrocesos que el virus está provocando en la igualdad de género. Ofrece dos recetas para combatir la dualidad entre trabajadores fijos y eventuales: contrato único y mochila austriaca. “La conclusión clave de la simulación es que un modelo mixto de contrato único y fondo austriaco tiene el potencial de reducir significativamente la segmentación del mercado laboral sin aumentar el costo del despido para las empresas ni reducir la protección del empleo

para los trabajadores”. La mochila austriaca es un sistema de indemnización del despido mediante el que las empresas aportan mensualmente una cantidad a la cuenta de ahorro de cada trabajador, que estos pueden rescatar si cambian de empresa o se jubilan.

La medida figuró en la agenda del cambio que el Gobierno impulsó el año pasado. También la reducción de los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal estructural y formativo. Pero ambas cuestiones quedaron finalmente aparcadas.

Entre las ventajas de la mochila austriaca, el FMI destaca la mejora de la movilidad laboral. Ade-

ciones: recomienda implantar la mochila austriaca para incentivar la movilidad de los trabajadores, y un sistema de contrato único para reducir al mínimo la temporalidad. El Fondo admite que la reforma laboral en vigor apoyó el crecimiento económico, pero la culpa de precarizar el empleo.

más, evita que las empresas despidan antes al empleado que lleva menos tiempo para ahorrar el coste superior del que lleva más, dado que la indemnización se ha ido abonando durante la relación laboral, y supone un alivio para las pymes, al eximirles de efectuar grandes desembolsos en momentos de recesión, cuando los despidos son más probables.

El FMI recuerda que la proporción de contratos temporales con una duración de menos de una semana alcanzó alrededor del 30% en 2019 y los de un mes rondó el 43%. Y que la probabilidad de pasar de un contrato temporal a uno indefinido en España

es de las más bajas de la UE. Sobre el desempleo juvenil, con España con las peores tasas del continente, urge a “una mejor coordinación entre las empresas y las universidades y una mayor participación de las empresas en el desarrollo de los planes de estudio”.

En cuanto a la subida del salario mínimo, ve luces y sombras. “Las consecuencias no deseadas de un aumento del salario mínimo en el empleo podrían contrarrestar parcialmente los efectos positivos sobre los ingresos de los asalariados bajos”, alerta. Y sugiere un impacto negativo en los jóvenes peor pagados asentados en las regiones más desfavorecidas.

Reforma laboral

También mete el dedo en una de las llagas abiertas en el Ejecutivo de coalición, la reforma laboral. En su balance de la norma aprobada en 2012 por Mariano Rajoy, que ahora Unidas Podemos pide derogar, el organismo da una de cal y otra de arena. Reconoce que “aceleró y fortaleció la recuperación”. Pero la culpa de aumentar la precariedad al reducir las horas trabajadas por promover el empleo a tiempo parcial, lo que se ha traducido en menores ingresos y mayor pobreza para los ocupados. “Estos factores deben revisarse con cuidado”, advierte. Además, cree que “el cambio estructural de la economía hacia el sector servicios” puede haber acentuado esa tendencia.

Al abordar la brecha de género, el Fondo reconoce avances. Como el ámbito de la representación pública, al haberse convertido en el país con más ministras y el segundo con más diputadas tras Suecia. Pero no ve ese ímpetu en las empresas. “La representación de las mujeres en puestos directivos del sector privado no ha avanzado”, reprocha. Y maneja dos riesgos vinculados al virus: su exposición a profesiones golpeadas por la pandemia, como la hostelería, el turismo y el comercio minorista. Y las crecientes responsabilidades en el cuidado familiar debido al cierre de escuelas, la mayor atención a los ancianos y las tareas del hogar. “La pandemia parece haber aumentado la desigualdad de género en el mercado laboral, así como en el reparto de responsabilidades de ciertas tareas domésticas no remuneradas”, concluye.



Cola ante una oficina de empleo en Palma de Mallorca, el 27 de octubre. / C. CLADERA (EFE)

El G20 diseña un plan para aliviar la deuda de los países más pobres

El foro fija un marco común para tratar el pasivo de las naciones más rezagadas

EL PAÍS, Madrid
La pandemia de coronavirus azota con fuerza la economía mundial y se ceba con los más vulnerables. El G20, del que forman parte los Estados más ricos y los mayores mercados en desarrollo, acordó ayer un marco común para aliviar la deuda de los países más pobres ante el

riesgo de suspensión de pagos suscitado por la crisis.

Se ha fijado un marco común, también acordado para el Club de París —el foro de acreedores y países deudores—, para aliviar el peso de la deuda de los países más pobres, que contará con la participación de todos los acreedores, incluido el sector

privado. El foro especifica, en una nota publicada ayer, que el proceso de reestructuración se iniciará a petición del país deudor y la evaluación de la solicitud se hará en función de un análisis de la sostenibilidad de la deuda en coordinación entre todos los acreedores.

“En principio, el examen de la deuda no significará una condonación o cancelación”, matiza el comunicado del organismo, que añade que habrá que estudiar caso por caso. Aun así, en la reunión telemática celebrada ayer entre los ministros de Finanzas del G20, presidido por Arabia Saudí, también se acordó que si la cancelación del pasivo es necesaria, “en los casos más difíciles cada acreedor participante llevará a cabo sus procedimientos internos de

aprobación, sin dejar de informar de ello a los demás acreedores”.

Esta medida es una extensión de la suspensión temporal de la deuda acordada el pasado abril. Entonces, los países del G20 movieron ficha para mitigar los efectos de la pandemia en el pasivo de los países más pobres y acordaron una moratoria del pago de la deuda para las 73 naciones más pobres del mundo —38 de ellas africanas— para los préstamos que vencían en 2020. El pasado octubre, la moratoria fue ampliada hasta junio de 2021; los reembolsos se efectuarán a lo largo de cinco años, más uno de gracia. Según el Banco Mundial, la deuda externa de estos países creció un 9,5% en 2019, hasta un récord de 744.000 millones de dólares.